

**JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 12
ALICANTE**

Avenida CATEDRATICO SOLER ESQUINA CON C/ DE LOS DOSCIENTOS,
TELÉFONO:

N.I.G.: 03014-42-1-2017-0010283

Procedimiento: Asunto Civil 000815/2017 -

SENTENCIA Nº 000119/2018

En la ciudad de Alicante, a dieciocho de abril de dos mil dieciocho.

D. CARLOS SAN MARTÍN GÓMIZ, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Alicante y su partido judicial, habiendo visto los presentes autos de Juicio Verbal nº 815/2017, seguido a instancia de la mercantil MEDIUS COLLECTION, S.L., contra [REDACTED] asistida de Letrada, de los que se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. A este Juzgado por turno de reparto correspondió demanda de Juicio Verbal, en fecha 15-05-2017, con el Nº 815/2017.

En la citada demanda, tras exponer los hechos base de su pretensión y alegar los fundamentos de derecho que estimó de aplicación, interesó que se dictara sentencia por la que se condene a la demandada a pagar la suma de 785'79 euros, mas intereses legales y las costas del procedimiento.

SEGUNDO. Admitida a trámite, en virtud de decreto de fecha 05-06-2017, se dio traslado a la parte demandada que, con fecha 04-09-2017 presentó escrito de contestación con allanamiento parcial en el que tras exponer los hechos base de su pretensión y alegar los fundamentos de derecho que estimó de aplicación, interesó que se dictara sentencia en los términos del escrito.

TERCERO. Por medio de diligencia de ordenación de 20-09-2017 se convocó a las partes a la celebración de vista, que tuvo lugar el día 18-04-2018, en la que no compareció la

actora y la demandada interesó el dictado de sentencia.

Abierto el periodo de proposición de prueba, la demandada propuso la documental, siendo admitida.

Concluida la vista quedaron los presentes autos vistos para sentencia.

CUARTO. En el presente proceso se han observado los términos y prescripciones legalmente previstos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Acción ejercitada. Mediante el presente proceso de carácter civil la parte actora del mismo ejercita acción de reclamación de cantidad, siendo el domicilio de la demandada en este partido judicial, acción y procedimiento, el declarativo verbal, para cuyo conocimiento se ha declarado competente este juzgado.

Por el contrario, la demandada se ha opuesto en la forma que consta en autos.

SEGUNDO. Sobre las pretensiones de las partes.

(1).- La demanda.

La entidad MEDIUS COLLECTION S.L. presenta demanda frente a [REDACTED], en reclamación de 785'79 euros, por la suscripción en fecha 10 de junio de 2015, de un contrato de préstamo de 416 euros de principal, a los que adiciona la partidad de 145'6 euros de comisiones, 187'20 euros de cuotas adicionales y 36'99 euros de interés devengado.

(2).- La contestación.

En el trámite de contestación la Sra. [REDACTED] reconociendo la suscripción del contrato, plantea como motivos de oposición, que han de ser declaradas nulas por abusivas las cláusulas sobre intereses moratorios y las "cuotas adicionales" por desconocer el origen contractual. Se alega que el interés remuneratorio es usurario y que el contrato es nulo.

TERCERO. Sustanciación del litigio.

(1).- Hecho no controvertido: suscripción del contrato

No se ha discutido la suscripción por parte de [REDACTED] de un contrato de préstamo con la entidad Kreditech Spain S.L. el día 10 de junio de 2015, y que se aporta por copia con la demanda. No ha sido impugnado el documento, por lo que surte prueba plena entre las partes (artículo 326.1 de la LEC).

(2).- Acerca de la usura en el préstamo

Se recuerda por la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2009 (Roj:STS 3875/2009, Ponente Excmo. Sr. D. Xavier O'Callaghan Muñoz) el tenor del artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura de 23 de julio de 1908, en el sentido de preveer que *"será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales"*.

Respecto de la desproporcionalidad, la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2009 (Roj:STS 7002/2009, Ponente Excmo. Sr. D. Jesús Corbal Fernández), dijo que *"la "desproporcionalidad" -supuesto legal de interés "manifiestamente desproporcionado"-, además de ostensible, debe contrastarse -medirse o ponderarse- en relación con las demás circunstancias y con la tasa del interés, con lo que se quiere significar la disimilitud de supuestos según las diversas circunstancias concurrentes en la operación crediticia y la cuantía del interés concreto a abonar"*.

Finalmente, ha de citarse los pronunciamientos efectuados por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 14 de julio de 2009 (Roj:STS 4672/2009, Ponente Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller) que, en punto a las consecuencias de la emisión de un pronunciamiento por el que se declare usurario el préstamo, se dispuso en el fundamento tercero:

"El artículo 3 de la Ley sobre Represión de la Usura de 23 de julio de 1908 establece que «declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan solo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de

lo percibido, exceda del capital prestado», precepto que se ha de poner en relación con el artículo 6.3 del Código Civil en cuanto establece que «los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención», como es en este caso la fijación legal de la obligación del prestatario de devolver la suma realmente recibida. En consecuencia, la declaración de nulidad del contrato de préstamo usurario produce como efecto fundamental el de que el prestatario está obligado a entregar tan solo lo recibido de tal modo que queda dispensado de pagar cualquier clase de intereses, usurarios o legítimos”.

A todo ello habrá de añadirse lo previsto por el artículo 319.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por el cual “en materia de usura, los tribunales resolverán en cada caso formando libremente su convicción sin vinculación a lo establecido en el apartado primero de este artículo (el cual confiere prueba plena a los documentos públicos autorizados por Notario, en lo referente al hecho, acto o estado de cosas que documente, fecha, identidad del fedatario e intervinientes)”.

En cuanto a los intereses remuneratorios u ordinarios, debemos recordar lo expuesto por la **Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Castellón núm. 77/2013, de 10 de diciembre (JUR 2014\172744)**:

“Ahora bien, en relación a si puede considerarse abusiva una cláusula que impone un interés que para el tipo de contrato como el de autos, es del 1,74% mensual o 20,84 anual, TAE 22,95%, el art. 19.4 LCC establece que en ningún caso podrán aplicarse a los créditos que se concedan en forma de descubiertos en cuentas corrientes un tipo de interés que dé lugar a una tasa anual equivalente superior en 2,5 veces el interés legal del dinero, que en la fecha del contrato era del 4%. Se trata, por tanto, de unos intereses abusivos. Por otro lado, desde la Sentencia de 14 de junio de 2012, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Juez nacional no puede moderar o modificar la cláusula que prevé los intereses abusivos, tan solo podrá limitarse a declarar su nulidad. En ese sentido la mencionada Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, declaró: “Así pues, del tenor literal del apartado 1 del citado artículo 6 resulta que los jueces nacionales están obligados únicamente a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultados

para modificar el contenido de la misma. En efecto, el contrato en cuestión debe subsistir, en principio, sin otra modificación que la resultante de la supresión de las cláusulas abusivas, en la medida en que, en virtud de las normas del Derecho interno, tal persistencia del contrato sea jurídicamente posible".

Con lo cual, el interés remuneratorio pactado sí ha de considerarse desproporcionado y excesivo y, por tanto, debe apreciarse la nulidad de la cláusula que determina dicho importe, con las consecuencias que de ello se derivan, que no pueden ser otras que las señaladas en la referida sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de junio de 2012, en la que, tras señalar el interés público que existe a la hora de proteger los intereses de los consumidores y la exigencia de que el Juez nacional controle de oficio el carácter abusivo de las condiciones generales tan pronto como disponga de los elementos de hecho y Derecho necesarios para ello, examina la cuestión y, aunque lo hace en el ámbito del procedimiento monitorio, entendemos es igualmente aplicable a los demás procedimientos. En dichas situaciones, el TJUE aplica el "principio de efectividad", según el cual, apreciada la abusividad de la cláusula, el art. 6.1 de la Directiva 93/13 impone a los Jueces nacionales dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultados para modificar el contenido de la misma. Determina también que el contrato en cuestión debe subsistir, sin otra modificación que la resultante de la supresión de las cláusulas abusivas, en la medida en que, en virtud de las normas del Derecho interno, tal persistencia del contrato sea jurídicamente posible.

Reiterar que la solicitud realizada por la demandada no tuvo como finalidad adquirir un bien o financiar un servicio, sino que se trató de un mero préstamo cuyo destino final se ignora, de ahí que no sea aplicable la invocada Ley 26/91 de 21 de noviembre, sobre contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles, derogada por el RDL 1/2007 de 16 de noviembre que aprueba el TR de la LGDCU (RCL 2007, 2164 y RCL 2008, 372) y otras leyes complementarias, pues esta normativa, aunque se refiere a los contratos a distancia, excluye claramente de su ámbito de aplicación a los contratos referidos a servicios financieros.

Debe recordarse igualmente que, aunque se declarase la nulidad del contrato, acreditado que la demandada recibió el dinero prestado, tendría obligación de devolver el importe con sus intereses. El art. 1303 CC (LEG 1889, 27) dice que

declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses; siendo doctrina jurisprudencial reiterada (SSTS 22 mayo 2006 , 12 noviembre 2010 , 23 de noviembre de 2011) que la obligación de restitución de objeto y precio nace de la Ley, y no del contrato que se declara nulo. Hasta el punto de que no es preciso que los contratantes hayan solicitado expresamente tal devolución, bastando con que se solicite la nulidad para que surja la consecuencia legalmente establecida. Por lo que se ha aplicado en los supuestos en que habiéndose solicitado la resolución de un contrato, se aprecia de oficio la nulidad radical, sin que suponga incurrir en incongruencia. Devolución que debe hacerse con los intereses, tanto por expresa disposición legal, como por aplicación del principio general que veda el enriquecimiento injusto".

En este caso los datos son incluso mucho más llamativos, puesto que tanto en el contrato suscrito el 10 de junio de 2015 se contempla un tipo de interés nominal del 35% (TAE del 3.752'37%). Supera notoriamente, y de forma exagerada el tipo de interés legal del dinero del año 2015, que era del 4%, llegando incluso a ser casi nueve veces superior.

De este modo se ha llegado a pronunciar la Audiencia de Pontevedra, Sección Sexta, en su reciente **Sentencia de 19 de diciembre de 2016 (JUR 2017\7103)**, en la que se dice de forma contundente:

"Debemos seguidamente analizar la estipulación correspondiente al interés remuneratorio en base al presunto carácter usurario del tipo establecido en el contrato.

Cuando la Ley de Represión de la Usura de 23 de julio de 1908, la llamada Ley Azcárate, tipifica como una de las modalidades de la usura los casos en que se fije un interés notablemente superior al normal del dinero, no está sino tomando como referencia el equilibrio de prestaciones y tratando de evitar aquellos casos en los que su ruptura resulte abusiva o desproporcionada.

La primera cuestión que se suscita es cuál es el interés que debe tomarse como referencia, y tal y como establece la STS Sala 1ª, de 25 de noviembre de 2015 "Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio (LEG 1885, 21) , «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente

superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados. Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia". En el presente caso hay que tomar como base el 30,98% fijado como TAE en el contrato.

La segunda cuestión que hay que valorar es cuál es la referencia que debe tomarse en consideración para poder determinar si el TAE incluido en el contrato es o no usurario, y la citada sentencia de STS de 25 de noviembre de 2015 declara que "El interés con el que ha de realizarse la comparación es el "normal del dinero". No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre). Para establecer lo que se considera "interés normal" puede acudir a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarles las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.). Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos. Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada". Además para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior

al normal del dinero, el interés estipulado sea "manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso".

El Tribunal Supremo en la sentencia citada de 25 de noviembre de 2015 señala que las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación; así cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal; sin embargo no consta que en el presente caso concorra dicha circunstancia.

No existe duda de que las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, pero no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso ahora analizado, ya que el tipo de interés legal del dinero en el año 2012, fecha de suscripción del contrato de préstamo, era del 4% y el interés normal en operaciones de préstamo con consumidores en enero del año 2012 era del 10,07% según se hace constar en la página del Portal del Cliente Bancario del Banco de España. Por lo tanto en este caso el interés reflejado en el contrato era superior en 7,5 veces al del interés legal del dinero y en 3 veces al del interés normal de ese tipo de préstamos. Incluso en el art.19.4 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo (RCL 1995, 979 y 1426) , de crédito al consumo se establecía un límite al interés en descubierto que se fijaba en una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el interés legal del dinero, lo que en este caso implicaría un interés de 10%, es decir 3 veces inferior al pactado.

Lo expresado nos lleva a estimar el recurso de apelación interpuesto y a declarar el carácter usurario de la cláusula de interés remuneratorio incluida en el contrato de préstamo".

Pues bien, si acudimos a la web del Banco de España a través del enlace

[https://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos de Intereses/entidades/](https://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Intereses/entidades/)

Nos encontramos con que durante el mes de junio de 2015 el tipo de interés aplicado por las entidades de crédito en los créditos con plazo inferior a los 5 años, el tipo de interés es del 9'03% en España, TAE 8'81%. Dicho esto, resulta evidente que con estos tipos concretos, algo superiores al legal del dinero del 4% para el año 2015, igualmente nos encontramos con que el TIN del 35% casi cuadruplica el de los créditos de menos de cinco años y el TAE de un alarmante y excesivo 3.752'37%, lo que no viene sino a corroborar el carácter usurario del préstamo y su nulidad por esta circunstancia.

En consecuencia, los intereses remuneratorios de este contrato son manifiestamente abusivos e implican la nulidad radical, absoluta y originaria del mismo, procediendo solo la entrega de la suma de capital entregada, deducidos los pagos previamente efectuados, sin tener en cuenta interés moratorio ni comisión alguna ni otra suma reclamada que obedezca a otros conceptos.

No resulta necesario analizar la abusividad de las cláusulas que la demandada impugna, ya que su principal motivo de oposición tiene favorable acogida.

Queda probado el pago de la suma de principal con la documental aportada, que no ha sido impugnada de contrario.

Debe ser desestimada la demanda.

CUARTO. Sobre las costas del proceso.

En cuanto a las costas de este procedimiento deberá seguirse lo dispuesto por el artículo 394.1 de la LEC

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,

FALLO

DESESTIMO la demanda interpuesta por la mercantil MEDIUS COLLECTION, S.L., frente a [REDACTED] y en consecuencia, **ABSUELVO** a la demandada de los pedimentos efectuados en su contra.

Se impone las costas a la actora.

La presente resolución es firme y contra la misma no cabe interponer recurso de apelación ante la Il. Audiencia Provincial de Alicante, de conformidad con lo previsto por los artículos 455 y ss de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Llévese el original al Libro de sentencias, dejando en los autos testimonio de la presente resolución.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo